

**¿DESMOVILIZACIÓN? SINDICALISMO, ORGANIZACIONES SOCIALES Y
GOBIERNO DE ULTRADERECHA EN ARGENTINA**

FERNANDO AIZICZON

Instituto de Humanidades (IDH), Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET),
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
E-mail: feraizic@gmail.com

JOSÉ BENCLOWICZ

Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Río
Negro (UNRN)
E-mail: jd.benclowicz@gmail.com

Introducción: indicios de desmovilización

6

El 10 de diciembre de 2023, una escena para muchos irreal y distópica se empezaba a materializar con la asunción a la presidencia de la Argentina de Javier Milei. El gobierno de La Libertad Avanza (LLA)¹ implementó inmediatamente su anunciado ajuste de proporciones extraordinarias, que viene impactando fuertemente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de los trabajadores y jubilados. Y aún así, la imagen y popularidad del presidente ha conservado hasta su primer año y medio de gestión niveles sustantivos de aprobación, pues es asociado a un sujeto capaz de terminar de raíz con los mayores problemas sociales que anidan, según su eficaz hipótesis, en la “casta”. Las medidas económicas vinieron acompañadas de políticas que establecieron nuevas reglas de juego con relación a la protesta social. Aún cuando pueden identificarse antecedentes en décadas previas, el quiebre es notorio: los márgenes de intervención callejera de las organizaciones populares se vieron limitados drásticamente por las restricciones que imponen nuevos protocolos de actuación policial, la represión y criminalización de las acciones, el ataque organizado desde el Estado en redes sociales a la dirigencia sindical, o la sospecha sobre el manejo de fondos estatales en organizaciones de

¹ La Libertad Avanza (LLA) es el nombre del partido político que llevó como candidato a presidente a Javier Milei, quien asumió el 10 de diciembre de 2023 luego de haber vencido a su rival, el peronista Sergio Massa, en un ballottage donde el vencedor alcanzó el 55,69% de los votos.

desocupados (o “piqueteras”).

Lo anterior se suma al desprestigio de la dirigencia obrera (en unos cuantos casos enriquecidos, eternizados en sus cargos, o inactivos frente a despidos o recortes salariales) ante sus propios representados y la sociedad en general, que votó mayoritariamente al actual gobierno. En un contexto ideológico donde la necesidad de un ajuste es compartida por oficialismo y oposición, las prácticas de protesta, movilización y deliberación que intentaron resistir esta ofensiva han sido rápidamente puestas en cuestión afectando sobre todo la capacidad y la posibilidad de la acción colectiva misma. Todo aquel que defiende su puesto de trabajo, se solidariza con demandas, o discute la validez de un ajuste que afecta salarios o derechos laborales es acusado de entorpecer un proceso que en principio busca eliminar las castas privilegiadas presentes en la sociedad, principalmente en espacios estatales. Empleados de la administración pública, del sector salud, docentes, trabajadores de dependencias estatales, científicos, entre otros, han sido blanco de ataques en la prensa o en redes sociales, cuando no hostilizados por un sector de la población. ¿Cómo fue posible este escenario en Argentina, a pocas décadas de haber sido uno de los mayores teatros de experimentación de resistencia social frente a los efectos de políticas de ajuste, que sellaron su suerte en el eslogan “que se vayan todos”? ¿Cómo es que aquel “Argentinazo”, ocurrido a fines del 2001,² ha sido retomado e invertido por la militancia libertaria armada con una motosierra que simboliza el recorte al gasto público, considerado inmoral? En este trabajo ensayamos una explicación de este giro en las prácticas, expectativas y representaciones sociales, atendiendo a las transformaciones que se registraron desde la década de 1990 a esta parte, incluyendo los determinantes años pandémicos.

En primer lugar, entendemos que debe examinarse con atención el carácter polisémico del “que se vayan todos” que la fuerza política gobernante, si bien con otros matices epocales, procuró evocar sesgadamente a su favor. También es preciso analizar la implementación de

² Se conoce como Argentinazo al ciclo de movilizaciones populares que terminó en diciembre de 2001 con la renuncia del entonces presidente Fernando de La Rúa, jaqueado por protestas callejeras y sucesivas crisis económicas, y tras de él renunciaron 5 mandatarios más, hasta el año 2003 en que asume Néstor Kirchner, inaugurando la restauración del sistema político. El popular cántico “Que se vayan todos, y no quede ni uno solo” expresaba por entonces la profundidad de la crisis de representación.

políticas económicas bajo los gobiernos progresistas-kirchneristas, que independientemente de cómo fueron presentadas, terminaron perpetuando desigualdades sociales. En esta línea, es posible pensar que la hegemonía de un discurso celebratorio de la conquista de derechos y de la acción protectora del Estado, en un contexto en el que tales beneficios eran prácticamente imperceptibles para un conjunto social amplio de trabajadores informales crecientemente pauperizados, contribuyó a su propia negación. Ésta se expresó con virulencia en los discursos y las políticas de la derecha radical, que centralizó en aquel Estado –en su existencia misma– todos los males sociales. En este sentido, derechos que se presentaron como universales terminaron apareciendo crecientemente como privilegios restringidos a una minoría, y los dirigentes obreros que los defendieron –no sólo la “burocracia” sindical– fueron considerados como parte de la “casta”. La puesta en cuestión de los formatos clásicos de lucha y las mutaciones en las identificaciones políticas de los trabajadores forman parte de este mismo proceso. Visto en conjunto, pareciera que el núcleo del aquel “que se vayan todos” permaneció en el sentido anti-privilegios, o anti-casta, sólo que ahora tomó la forma de una pulsión igualitarista negativa, toda vez que la posesión de derechos laborales comenzó a ser vista como privilegio, inequidad, constituyendo una distorsión social cuya corrección exige nivelar hacia abajo, vía desposesión de los mismos. En otras palabras, no se trata de ampliar la base social de derechos, sino de eliminarlos en tanto tales, aunque ello implique un combate lanzado desde arriba hacia abajo, donde las disputas entre sectores de una clase trabajadora fragmentada no hacen más que aumentar sus fisuras internas.

Las diferencias entre trabajadores registrados (con derechos) y una enorme masa de desposeídos (sin derechos) no cesó de incrementarse en las últimas décadas y tocó fondo durante la pandemia. Lo que interpretamos como efecto de ese fenómeno es que esa diferenciación cuajó en el sentido común junto a la idea de que las desigualdades existentes deben aplicar a todos los trabajadores.

Este escenario ha producido perplejidad tanto en el activismo político como en las ciencias sociales, que intentan explicar el fenómeno aunque, a nuestro entender, sin observar con demasiado interés algo crucial: la lenta construcción de un campo de desmovilización social generalizado, al menos si se considera el historial beligerante que ha caracterizado a la sociedad

argentina contemporánea.

9

Curiosamente, la desmovilización es un tópico poco transitado en las ciencias sociales a nivel global, aunque pueden destacarse varios estudios recientes que nutren el presente trabajo: en un nivel micro, esto es, la participación individual en la actividad de diversos movimientos, las investigaciones de Davenport (2015), Fillieule (2009, 2015), Gorski y Chen (2015), establecen como causas la desvinculación individual y cierto desgano de la práctica militante o del activismo que conducen a procesos de desmovilización general. En términos generales, la desmovilización ha sido definida como el proceso mediante el cual la actividad de un movimiento social —de campos enteros, de organizaciones y activistas, o de campañas políticas específicas— disminuye y finalmente cesa. Al respecto, Davenport (2015) distingue la desmovilización positiva y la negativa. La primera está asociada a la percepción de un éxito; la segunda, donde se sitúa nuestro caso, refiere a un colapso, obstáculo o explosión del movimiento. Heaney y Rojas (2011) y Lasnier (2017) han examinado la desmovilización en movimientos sociales y -en una escala más amplia- lo que denominan campos de movimiento. De conjunto, podemos sintetizar que estos autores consideran ciertos patrones de desmovilización que pueden enumerarse en 1) cierre de oportunidades políticas para la movilización, 2) fuerte represión estatal coercitiva, 3) contra-movilización civil. Entre estos, como se verá, los dos primeros jugarán un papel central en la actualidad argentina. Entre las presiones externas, un aspecto estudiado que se acerca a nuestro caso es aquel que destaca el control, vigilancia y represión estatal-policial en las protestas (Della Porta; Reiter, 1998, Koopmans, 1997). Por su parte, Earl (2006) aporta la diferenciación entre acción represiva del Estado y otras manifestaciones de control social por parte de agentes privados (es decir, no estatales) que pueden también ejercer una presión desmovilizadora, tales como los medios de comunicación. Estos últimos, y especialmente las redes sociales, desempeñan un rol destacado en el diseño de la política represiva del actual gobierno. En una palabra, se trata de una diversidad de formas de control social que inciden en la presente desmovilización, a las que hay que agregar las dinámicas históricas en las que se encuentra envuelta la clase obrera argentina, de lo cual se deduce el carácter multifacético que asume el fenómeno.

Partiendo de estos aportes y teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, en las líneas que

siguen analizaremos la combinación de factores que fue gestando el presente campo de desmovilización social generalizado. Para eso, organizamos el artículo con un criterio cronológico: en el primer apartado examinamos el impacto de las reformas neoliberales de los años 90 y el ciclo de protestas que terminó en el “Argentinazo” de diciembre de 2001; en el segundo abordamos el período de los gobiernos kirchneristas-progresistas; en el tercero nos detenemos en los años de la pandemia, y en el cuarto analizamos la evolución de la situación presente desde el ascenso de Milei. En el último apartado exponemos las conclusiones del trabajo.

Crisis y acción colectiva en la década de 1990

Tras la salida de la última dictadura militar (1976-1983), principalmente los sindicatos y las organizaciones sociales, barriales y de DDHH, protagonizaron grandes eventos de movilización en pos de recuperar territorio perdido en dictadura. Los primeros, buscaron normalizar sus instituciones, volver a la vida democrática, y mejorar sus condiciones materiales de existencia (salarios), que al poco tiempo comenzaron a deteriorarse hasta verse pulverizados a fines de los '80, en virtud del fenómeno hiperinflacionario. Las segundas, pelearon contra las secuelas del genocidio y por el juzgamiento de sus responsables.³ De este modo, una vigorosa cultura política de protesta y resistencia se fue forjando al calor de los primeros años de recuperación democrática: grandes movilizaciones y huelgas convivieron con el prematuro fracaso del alfonsinismo y cimentaron las bases para su continuidad durante la década siguiente bajo otra tonalidad.

Tras la fallida experiencia radical (1983-1989), un muy profundo ajuste económico que incluyó privatizaciones generalizadas, despidos masivos y una reforma estructural del Estado y de la economía argentina fue orquestado durante los años 1989-1999 por un gobierno peronista, es decir, de raíz nacional-popular. Las privatizaciones en particular dieron lugar a protestas, huelgas y cortes de ruta que se desplegaron sobre la base de la nutrida tradición de luchas que

³ Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical, UCR) fue el primer presidente electo tras la última dictadura. Asumió en diciembre de 1983 y entregó anticipadamente su mandato al peronista Carlos Menem en julio de 1989, acorralado por una crisis hiperinflacionaria y en medio de una oleada de saqueos a supermercados.

se había reactivado tras la dictadura. Sin embargo, en un primer momento, la transformación económica y social que operó en esa etapa no se topó con una resistencia organizada a nivel nacional capaz de obstaculizarla. Pasaron varios años hasta que se terminó de activar un nuevo ciclo de protestas de magnitud. Recién a partir de la segunda mitad de la década de 1990, el creciente aumento de la desocupación desembocó en las “puebladas” que se registraron en aquellos espacios fuertemente impactados por las consecuencias del cierre de ramales ferroviarios, la privatización de empresas estatales, o la dificultad de las gestiones locales para pagar sueldos. De las más conocidas, Jujuy, Salta, Neuquén, Corrientes, fueron las provincias que presenciaron este tipo de acción colectiva, vinculada a los niveles múltiples donde impactó el ajuste.

11

Entre las explicaciones de aquel período de avance incontenible de las reformas neoliberales, suelen destacarse, junto con la hegemonía ideológica que fue asumiendo a nivel mundial esta corriente, la defección de la mayor parte de la dirigencia sindical peronista, alineada con el gobierno de Carlos Menem. El momento coincide de hecho con la transformación de parte de la dirigencia sindical en burócratas-empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones montando empresas tercerizadas, al tiempo que mantenían el control sobre los sindicatos y sus obras sociales. Pero interesa aquí llamar la atención sobre un elemento previo, que condicionó la conducta de esos dirigentes, y que tendió a replicarse en la actualidad. Quienes protagonizaron esas primeras protestas de la década de 1990, que terminaron aisladas y derrotadas, fueron los trabajadores involucrados y sus familias, e incluso no participaron todos, sino una parte de ellos. ¿Por qué el resto de la población trabajadora no se sumó, privando al movimiento de una contundencia capaz de frenar el ajuste y la reforma del Estado? Aún cuando no contamos con un estudio sistemático sobre este punto, lo que aparece en distintos casos y puede proponerse como hipótesis general es que el estado de cosas que vinieron a dismantelar las reformas neoliberales era aceptado e incluso considerado como necesario desde el punto de vista de los sujetos lanzados a la lucha, pero no lo era para el resto. En otras palabras, el tan mentado “Estado benefactor” que habría sido el blanco de esas reformas, no existió nunca realmente, sino que lo que caracterizaba –y caracteriza– a la población trabajadora argentina es una notoria segmentación dentro de la cual se pueden distinguir aquellos sectores que lograron

la conquista de numerosos derechos sociales y laborales, y aquellos cuyas condiciones de vida y trabajo se han caracterizado por la precariedad y la informalidad (Benclowicz, 2011a).

Así, los actores que componen “objetivamente” la clase obrera están largamente distanciados por diferentes formas de vida y experiencias. Los derechos obtenidos por un sector resultan ser privilegios ante los ojos de quienes nunca contaron con ellos ni vislumbraron acceder a esa condición. Incluso, no es infrecuente que esta distancia social y cultural derive en antagonismos de clase cuando un repartidor actual o una empleada doméstica presta sus servicios precarizados a los trabajadores formales estatales o privados bajo convenio. En este sentido, un obrero de la localidad petrolera de General Mosconi, que había trabajado en YPF hasta la privatización de 1991, recordaba en una entrevista:

mientras nosotros ganábamos, ganábamos y la gente no tenía trabajo... y vivía a lo que nosotros queríamos pagar (...) cuando llegó momento de la privatización mucha gente, muchos habitantes dijeron, perdoname la expresión, ‘que se caguen, ahora van a ir a comer mierda, ahora tanto que han sido nariz parada, ahora van a ir a comer mierda’ (Testimonio tomado de Benclowicz, 2013, p. 91).

La idea de la existencia de un “Estado benefactor” antes de las reformas de los años ‘90, así como la de una “década ganada” o un “estado presente” a partir del kirchnerismo/progresismo (2003-2015), parece reforzar, en su falsa universalidad, las carencias de los excluidos de estos modelos. ¿Por qué habrían de defender un bienestar, una ganancia o una presencia que los excluye alevosamente, mientras se pregonan unas conquistas que benefician supuestamente al conjunto de la población trabajadora? Esta fragmentación se refleja también en la reticencia de la CGT y los gremios en general a la hora de crear lazos de solidaridad de clase o establecer alianzas políticas. Y es que un trabajador despedido, o un flexibilizado (contratado a término), o “en negro” (no registrado), no contribuye a las arcas sindicales, por lo que no es compatible con esa estructura tradicional.⁴

Más allá de los elementos específicos de la etapa actual, es posible identificar una

⁴ La excepción fue la minoritaria CTA (Central de Trabajadores Argentinos), que ofreció en los tempranos ‘90 la afiliación individual y de desocupados a su central. Para el caso de protestas provinciales y puebladas, la participación de regionales de sindicatos nacionales o gremios provinciales junto a organizaciones de

cuestión de base presente también a principios de la década de 1990: la persistencia de fuertes desigualdades e injusticias que diferenciaron notoriamente a distintos grupos de trabajadores, y el advenimiento de una fuerte crisis de acumulación. En ambos casos, los cambios estructurales que terminaron imponiendo las crisis son resistidos por una parte de quienes consideran que el cambio en ciernes destruirá sus conquistas empeorando sus condiciones de vida. En el resto, que compone la mayoría, se observa una amplia gama de actitudes que van desde la observación resignada de un proceso considerado inevitable, hasta un apoyo abierto a unas reformas que impactan visiblemente sobre aquellos que aparecían como privilegiados. Entre ambos, no faltan quienes piensan que, aún sabiendo o intuyendo que un resultado favorable no está garantizado, el calamitoso estado de cosas previo justifica un golpe drástico de timón.

13

En el caso de los '90, las fisuras del modelo impuesto abrieron paso hacia la segunda mitad de la década a un nuevo escenario de creciente movilización protagonizado por actores emergentes. Las puebladas fueron eventos policlasistas donde vecinos, empleados estatales, obreros, pequeños comerciantes e incluso funcionarios locales salieron a cortar las rutas para manifestarse, tomaron edificios públicos y quemaron residencias de políticos señalados como responsables, entre otras acciones. En los casos más beligerantes, surgieron identidades cuyos nombres aludieron a la acción en marras: 'piqueteros' fueron aquellos sujetos involucrados en cortes de ruta, que levantaban barricadas para resistir la represión y que solían confluír en asambleas donde decidían sus acciones. Identidad y acción dieron nacimiento a los 'movimientos piqueteros' o de desocupados organizados, el gran fenómeno de los '90. La amplia visibilización de sus luchas y su éxito en la obtención de conquistas parciales convirtieron sus métodos en formatos modélicos de acción colectiva, esto es, se expandieron y fueron utilizados por otros actores sociales. De esta manera, la relativa desmovilización sindical que había predominado hasta ese momento fue suplantada por la activación vigorosa de movimientos beligerantes que no estaban desprovistos de la participación de los sindicatos que se

desocupados existió a pesar de las tensiones que el vínculo ocupado-desocupado generó entre ellas. Ver Aiziczon (2017).

oponían al modelo menemista –los de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en particular jugaron un rol significativo por estar compuestos de docentes y estatales mayoritariamente–, aunque ya no los encabezaban.

En aquellos movimientos piqueteros, confluyeron elementos viejos y nuevos: les dieron forma aquellos militantes gremiales y políticos con amplia experiencia organizativa, ahora desempleados, que contribuyeron a agrupar a un vasto contingente de trabajadores informales que no tenía cabida en los sindicatos (Benclowicz, 2011b). No habiendo participado en general activamente de las luchas sociales hasta ese momento, en el contexto de desocupación masiva de la segunda mitad de la década de 1990 fueron llamados a intervenir políticamente a través de ese movimiento, que en su punto más álgido supo confluir con sectores medios urbanos, los ‘caceroleros’, otro actor que se definió por su tipo de protesta: el golpeteo de cacerolas. A estos ejemplos hay que sumarle el fenómeno de las fábricas recuperadas, experiencias donde trabajadores expulsados por la patronal o abandonados de cara al cierre de establecimientos productivos decidieron ocuparlos y ponerlos a producir bajo su dirección. En todos los casos, los movimientos que emergieron, desplegaron acciones que rompieron los moldes de la intervención sindical tradicional, impotente en ese contexto, y eran encabezados por actores cuya imagen contaba con una legitimidad ausente entre las desgastadas figuras de los dirigentes gremiales.

Por cierto, no todos esos movimientos siguieron un curso de politización idéntico, pero entre ellos se configuró la escena de beligerancia que dominó el cambio de siglo y supo colocar a Argentina como un laboratorio que generó expectativas emancipatorias, sobre todo porque el grito que terminó operando como síntesis hacia fines del 2001, aunque limitado a su faz urbana, fue el mencionado “*Que se vayan todos... y no quede ni uno solo*”. Su interpretación, puede intuirse, no fue unívoca: ¿ciclo de protesta, momento pre-revolucionario, estallido social?, ¿reacción antipolítica con derivaciones autoritarias, deseo de construcción de un nuevo orden político o mera expresión de injusticias acumuladas? Como sea, la huella que sí dejó el 2001 indicó una clara disposición popular a la acción colectiva desafiante del orden político, cuya potencialidad (y limitación) residió en el cuestionamiento a formas organizacionales tradicionales (partidos, sindicatos), que la

atmósfera académica de esa época leyó con afinidad hacia la izquierda política. Bronca, hartazgo, sensación de injusticia fue lo evidente en ese entonces; hacia dónde conducían esas emociones a corto, mediano o largo plazo era un asunto imposible de establecer.

Interacciones entre economía y acción colectiva (2003-2020)

El ciclo de protestas iniciado en la segunda mitad de los ‘90 se condensó entre diciembre de 2001 y junio de 2002; en ese lapso se constituyó la última escena de movilizaciones populares masivas, que pusieron en cuestión el sistema de relaciones de poder en la historia argentina reciente. Tras la renuncia de cinco presidentes consecutivos, el sistema político tomó urgente nota de la necesidad de neutralizarlas. Ese fue el inicio, a su vez, de un ciclo de restauración del poder estatal y de relanzamiento del modo de acumulación de capital (Bonnet, 2015). En efecto, si la economía argentina padecía una depresión al menos desde 1998 –que a principios de siglo hizo estallar el régimen de convertibilidad peso/dólar–, ésta se resolvió en un nuevo ciclo de crecimiento económico a tasas elevadas entre 2003-2011, soporte de los denominados gobiernos progresistas y/o populistas presentes en el mismo período en otros países latinoamericanos (Kirchner, 2003-2007, Fernández de Kirchner –CFK–, 2007-2011, 2011-2015).

Sin embargo, el año 2011 marcó el fin de ese crecimiento, basado en altos precios de los *commodities*, y el comienzo de una prolongada recesión que se estira hasta nuestros días, con base en la restricción externa de la acumulación de capital. Durante el segundo mandato de CFK (2011-2015), esto se tradujo en la metáfora de la “sintonía fina”,⁵ que significó que el locus sobre el cual el postergado ajuste debía recaer fue, lógicamente, el de un gasto público cada vez más difícil de sostenerse en las condiciones de escasez de ingreso de divisas.

Pero la resolución temporaria del problema macroeconómico bajo los gobiernos progresistas incluyó la aplicación de una política fiscal expansiva, con planes sociales de respaldo al estudio y la formación como el PROGRESAR y la Asignación Universal por Hijo

⁵ En octubre de 2011, el Gobierno de CFK implementó un control de cambios y un cierre parcial de la economía, que se transformaron en mecanismos permanentes que posponían la crisis y abrían paso a la larga fase de estancamiento.

(AUH), entre otros, y un incremento de la presión tributaria (incluido el denominado “impuesto a las ganancias” o “impuesto al salario”). Esto tensionó permanentemente la puja distributiva en medio de un contexto que desincentivó la inversión, y amplió la brecha entre franjas dentro de la clase trabajadora entre aquellos estratos superiores, alcanzados por los impuestos a sus ingresos, y una mayoría pobre que esperaba disciplinada la redistribución de recursos estatales (Caracoche, 2020). A su turno, organizativamente los sindicatos también se fragmentaron y para el año 2012 coexistían cinco centrales de diverso espesor: las oficialistas CTA de Yasky y CGT liderada por Caló, las opositoras CTA autónoma, CGT conducida por el camionero Hugo Moyano, y la CGT conducida por Barrionuevo. Durante su segundo mandato, CFK padeció 5 paros generales de las centrales opositoras.

16 Por otra parte, la aludida “sintonía fina” de CFK vino acompañada del intento de limitar las protestas sociales mediante la aplicación de protocolos para las manifestaciones, para lo cual el bloque oficialista presentó en marzo de 2014 un proyecto de ley a fin de limitar los piquetes. Antes, en 2011, otro escándalo agitó las aguas político-sindicales con la sanción de la Ley Antiterrorista, y al año siguiente salió a luz el “Proyecto X”, una práctica de espionaje sobre organizaciones sindicales y políticas diagramado por la Gendarmería Nacional, bajo conocimiento de la ministra de seguridad Nilda Garré. Vale retener estas cuestiones al momento de sopesar el consenso en la élite política sobre la necesidad imperiosa de reprimir, contener y desincentivar las movilizaciones sociales años antes de que LLA la haga verdadera política de Estado. Complementariamente, el gasto público en diversos tipos de planes sociales trajo consigo una domesticación e institucionalización extrema de los denominados movimientos y organizaciones sociales, que vieron desnaturalizado su origen beligerante allá en los ‘90 y, con el transcurrir de los años, sufrieron la despolitización de sus bases. Este dato es relevante pues al asumir Milei, el ataque a la dirigencia piquetera en general socavó no sólo su alicaída legitimidad pública sino sobre todo profundizó la desmovilización de sus organizaciones.

Más de una década de estancamiento afectó negativamente las condiciones materiales de existencia de la clase obrera en general, golpeada por el deterioro salarial y la expansión de la pobreza. Fue particularmente entre los trabajadores precarizados donde más impactó ese progresivo deterioro, agravado notoriamente por la espiral inflacionaria. Con una importante

aceleración desde el segundo mandato de CFK, que sólo menguó a partir de la implementación del programa económico del gobierno de Milei, la inflación debe destacarse entre los elementos que fueron configurando las subjetividades de este enorme sector. Y esto porque a la imprevisibilidad de sus ingresos, golpeados por la recesión, se fue agregando la imprevisibilidad –agravada durante el gobierno de Macri– del poder adquisitivo que podrían aportar, un fenómeno inicialmente novedoso para aquellas generaciones que no vivieron la hiperinflación de finales del gobierno de Alfonsín. Si consideramos a su vez que los gobiernos progresistas, que se presentaban como defensores de los derechos de los necesitados, no redujeron los niveles de informalidad laboral, no es tan extraña la búsqueda de nuevos horizontes políticos por parte de sectores castigados cada vez más amplios. Y entre otros, en el horizonte, Milei asomó con su discurso anti “casta”, homologable al “que se vayan todos”.

17

Ahora bien, las condiciones materiales no son la única variable que condiciona la acción y sus sentidos. El período de restauración política iniciado en 2003 se caracterizó tanto por disputas salariales como por pugnas por encuadramiento sindical, mientras se registraba una recuperación de los niveles de empleo tras la crisis del 2001. La gran actividad sindical, de movimientos sociales, política y reivindicativa, fue registrada por los estudios sociales y denominada “revitalización sindical”. En ese contexto, el peronismo se mantuvo hegemónico en el movimiento obrero y acompañó, con tensiones, las experiencias del progresismo, que le exigió su cuota de paz social, una tradición de décadas en la historia argentina. Con el triunfo de Macri, las protestas recrudecieron esta vez en rechazo de la reforma laboral, previsional y tributaria durante diciembre de 2017. El freno impuesto a estas políticas condicionó la viabilidad del gobierno y favoreció el triunfo posterior de la última experiencia progresista, el Frente de Todos, liderada por Alberto Fernández y CFK (2019-2023). La expectativa del retorno del peronismo progresista al poder desmovilizó “desde arriba” a sindicatos y movimientos sociales, quienes participaron de su triunfo. Nuevamente, el aval a gobiernos peronistas (y la transformación de dirigentes sindicales en funcionarios estatales) redundó en una relativa paz social.

En este sentido, 2017 y 2018 resultaron años bisagra pues las fuertes y violentas protestas en contra de las medidas de reforma laboral del macrismo no tuvieron continuidad en

términos de un desarrollo ofensivo de la conflictividad obrera. Por el contrario, fueron seguidas por una caída del salario y una reinstitucionalización (años 2019-2020) que jugaron a favor de una mayor desmovilización -intensificada todavía más en los años pandémicos-, que se tradujo en reducción de la movilización callejera, despolitización del conflicto obrero y disminución de las huelgas (Piva, 2024: 58). Así, nos encontramos con un cierre parcial de las oportunidades políticas para la movilización que precede al ascenso del gobierno de Milei.

Los tiempos del confinamiento

¿Cuánto de lo sucedido durante la excepcional y abrupta ruptura de la vida cotidiana que significó la epidemia de covid-19 afectó las condiciones materiales y la subjetividad de los trabajadores? Si bien existen aproximaciones a lo que aconteció durante la pandemia con relación a los principales conflictos laborales desatados durante el confinamiento, carecemos aún de estudios que ahonden sobre los efectos en las condiciones de acción colectiva de los trabajadores en general a más largo plazo, relacionados a las dinámicas previas y a los años posteriores. Sí conocemos el efecto principal que produjo sobre la población trabajadora, y que tiene que ver con las condiciones de vida, en franco deterioro, que hicieron elevar los niveles de precariedad del trabajo y los índices de pobreza en al menos 15 puntos porcentuales durante los primeros años del nuevo siglo (OSDA-UCA, 2022: 2). El mismo informe elaborado por la Universidad Católica Argentina nos dice que el 60% de la fuerza de trabajo, calculada en unas 12 millones de personas, tenía problemas laborales hacia 2022 aún si operó tras la pandemia una recuperación del empleo, lo que indica que se trató de empleos baja calidad, evidente en el dato que señala que una cuarta parte de los ocupados son pobres. En crudos números, el ingreso real de los trabajadores cayó un 24,3% comparado al año 2017.

Por otra parte, como señalan Collado y Roitman (2024), a la hora de registrar la conflictividad existe un dilema en función de los cambios sociales operados por la omnipresencia de las redes sociales, que fueron espacios donde el conflicto circuló, se instaló y disputó sentido, generando un subregistro en las fuentes clásicas desde donde los analistas explican la dinámica social. La actividad fue tan intensa y comprimida a lo virtual que el gobierno de Alberto Fernández intentó un protocolo de “ciberpatrullaje” con intenciones de

medir el humor social. La medida de control y amedrentamiento tuvo el antecedente, y otra vez el aval, de miembros del PRO en la voz de Patricia Bullrich, elegida luego ministra de seguridad de LLA.

Con todo, y más allá de la imposición del distanciamiento y los controles sociales, se produjeron numerosas acciones colectivas lideradas por aquellos que fueron signados como “trabajadores esenciales” (sector salud, transporte, alimentación), lo que sugiere una diferenciación interna de clase, por ejemplo entre esenciales y no esenciales, relevantes e irrelevantes, riesgosos, visibles, invisibilizados, etc. Si esa fragmentación era preexistente, la pandemia la puso en relieve, luego, el paso del tiempo y la política hizo lo suyo desplazándola a una diferenciación más burda entre casta y “gente de bien”, en el lenguaje de LLA.

Para Collado y Roitman, las acciones de los trabajadores esenciales marcaron el punto de inflexión ya que aún con los condicionamientos que se dispusieron desde el Estado (aislamiento y distanciamiento social), se expresaron en diversas manifestaciones, acciones y demandas públicas. Durante el primer año de pandemia, las demandas incluyeron la exigencia de protocolos adecuados para realizar las denominadas actividades esenciales, la recomposición salarial frente a recortes de jornada o suspensiones y la defensa de puestos de trabajo; la característica de estos reclamos fue cierto desborde de las organizaciones sindicales. A su vez, se registraron protestas en defensa de las formas de supervivencia de aquellos que se desempeñaban en sectores de la economía informal (Basualdo y Peláez, 2020). Y aquí el dato es que operó un desplazamiento: son los más precarizados, sin coberturas legales, sin afiliación sindical, que junto a los trabajadores de la salud, alimentación y transporte, constituyeron los actores más beligerantes. El gran ejemplo de sector precarizado que movilizó en pandemia fue el de los *deliverys*.

Si bien el confinamiento dificultó la disposición a la acción colectiva, la precariedad de condiciones laborales que alumbró aquel fenómeno en los denominados trabajadores “esenciales” no impidió que se éstos movilizaran aún contra la inacción de sus representantes gremiales; por caso, una huelga destacada en este sentido fue la que protagonizaron los trabajadores de la salud en Neuquén durante casi 60 días, entre abril-mayo de 2021, y que tuvo todos los ingredientes que venimos señalando. La huelga comenzó por la indignación que

generó el acuerdo que firmaron los gremios de estatales ATE y UPCN con el Gobierno provincial, que otorgaba un 12% de aumento, luego de un 2020 sin aumentos salariales y una inflación del 40%, pero además se agregó el hartazgo de un sector de la clase trabajadora “esencial” que estuvo en el centro de las tareas contra la pandemia. Los aplausos y discursos “con honores” que le profería la sociedad y el gobierno coexistía con bajos salarios, precarización, falta de condiciones de seguridad e higiene. El conflicto se desplegó incluso con cortes de ruta y movilizaciones en puntos estratégicos tales como las zonas petroleras de Vaca Muerta.

Visto de conjunto, la deslegitimación de las dirigencias sindicales, la profundización de diferencias internas entre trabajadores, la agudización de las condiciones de precariedad de la mayoría de la población activa –sin derechos ni coberturas de ningún tipo–, hicieron que aquel Estado que se autopercibió “presente” pierda autoridad frente a una masa de trabajadores precarizados y otra mayor de desposeídos fuera del alcance de cualquier política pública. En algún grado no menor, los escándalos que protagonizaron funcionarios públicos en torno a vacunatorios “VIP”, cenas y fiestas cuando la población padecía el confinamiento, la irresolución de la creciente inflación, y la evidente connivencia de la dirigencia sindical con el gobierno de Fernández-CFK –sumido en disputas internas– sembró las condiciones para que la “opinión pública” señale, no sin razón, la complicidad de la dirigencia gremial con aquellos, colaborando por efecto rebote al desprestigio de todo lo que tenga que ver con protestas sindicales.

A su vez, como señala Semán (2023), bastante antes del último gobierno de Fernández-CFK una significativa porción de estos trabajadores empezaba a identificarse con la figura del emprendedor, que terminó constituyéndose no sólo como categoría laboral, sino también moral. Se trata de la reivindicación del esfuerzo individual y del mérito como modelo alternativo al de un Estado que proclama derechos colectivos que al no plasmarse, son fácilmente leídos como privilegios corporativos y políticos de una “casta”. No es la primera vez que la perspectiva de ascenso social en base al esfuerzo individual domina el horizonte, la misma ilusión embargó a buena parte de los trabajadores desvinculados de las empresas privatizadas durante los años '90, que invirtieron sus indemnizaciones en distintos emprendimientos comerciales y de

servicios mayormente fallidos. Tampoco es nuevo encontrarse con sujetos pauperizados redefiniendo en términos positivos sus carencias, como hacen ahora los desocupados-emprendedores. Lo hizo una importante franja de trabajadores desocupados –entre ellos parte de los emprendedores que fracasaron por entonces– al conformar el movimiento piquetero. Sólo que durante la segunda mitad de la década de 1990 se trataba de la decepción de las promesas liberales y de las iniciativas individuales, por lo que la redefinición identitaria que habilitaba salir de la pasividad y pasar a la acción se concebía en términos colectivos. Hoy, pasar a la acción se piensa en términos individuales y en oposición a lo estatal-colectivo, de ahí que la trayectoria de los cuentapropistas y emprendedores aparezca como modélica. Así, en el nivel micro, se registra una creciente desvinculación de los sujetos de lo colectivo que favorece los procesos de movilización en general.

21

En el contexto del confinamiento obligatorio esta última perspectiva se potenció, en la medida en que las acciones estatales aparecían como inconducentes, debilitando la fuerza simbólica que podrían haber tenido medidas como el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) que aunque insuficientes, procuraron alguna protección para los trabajadores informales. Todo el abordaje de la pandemia, en el que coincidieron inicialmente oficialismo y oposición, pasó a ser observado con acritud por amplios sectores de la población.

Una vez concluido el confinamiento, la inflación, que aceleró su curva ascendente con los primeros síntomas de reactivación, terminó de erosionar los discursos en torno a la presencia y acción del Estado como valores positivos. En efecto, si hacia diciembre de 2021 la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) se ubicaba en torno al 50,7%, un porcentaje algo inferior al registrado a comienzos del gobierno de Fernández-CFK, a mitad de ese año el índice trepaba nada menos que a 71%, para alcanzar el 94,8% en diciembre de 2022. Estimar el impacto de esta dinámica resulta más complejo de lo que parece, ya que las actualizaciones salariales con respecto al alza de precios -que muchas veces no llegaban a compensar por completo la pérdida del poder adquisitivo por la inflación- aplican únicamente a los asalariados formales y no a la enorme y creciente masa de trabajadores precarizados, un 50% del total hacia 2023, con ingresos un 49% menores que aquellos negociados en paritarias por el sector privado

(OSDA-UCA, 2023).

Para encontrar una situación comparable, es forzoso remitirse a los momentos hiperinflacionarios del gobierno de Alfonsín (1989). Nos encontramos con un sector formal en buena medida desmovilizado y desorientado que corre de cerca, pero siempre detrás de los precios, y otro informal que parece tener cada vez menos que perder. Este es el contexto en el que un mayoritario sector de trabajadores informales y una significativa parte de los registrados otorgó su voto a Milei, un candidato que logró presentarse como completamente ajeno a las fuerzas tradicionales y que construyó exitosamente esa figura de límites porosos –la “casta”– como responsable de todos los males. En su versión restringida, la casta refiere a los dirigentes políticos, sindicales y sociales que “viven del Estado”; en una acepción más amplia, caben los trabajadores estatales e incluso los privados registrados, que cuentan con “privilegios” –derechos– cuya vigencia se encuentra ciertamente amenazada, más aún cuando predomina un clima de desmovilización. Veamos.

22

El gobierno de Milei: desmovilización y represión

El momento del anuncio del triunfo electoral de Milei, su acto de asunción, sus visitas a distintas provincias, estuvieron caracterizados por la escasez de público presente, lo cual contrasta con la escena previa que se repetía con todos los presidentes electos al inicio de su gestión. Esto ha llevado a identificar una supuesta incapacidad para convocar multitudes, viendo allí un dato de su lábil popularidad o su endeble base electoral, limitada al espacio de las redes sociales. Sin embargo, creemos que sobre este fenómeno reside un punto nodal para comprender el todavía incipiente cambio en la cultura política que aquí nos convoca: el ejercicio del poder, la constatación del convencimiento de una idea, el apoyo a quien manda, ya no parecen medirse en la convocatoria de miles de movilizados; al contrario, prescindir de ese atributo, otrora valorizado en la política argentina, no parece hacer mella en quien hoy dirige los destinos de millones. Más aún, en el contexto descrito, las movilizaciones callejeras por motivos políticos han caído en descrédito, señaladas por sus detractores como momentos en que se ponen en escena aparatos de movilización (partidos, sindicatos, movimientos sociales) cuya fuente de financiamiento es el sospechado Estado, agente extractor de recursos de una

población que lo padece.

Pero la pregunta por la (des)movilización no debe limitarse al análisis de los efectos sobre la disposición a la acción fruto de una política deliberada de deslegitimación de su práctica. Junto a indiscutibles valoraciones negativas sobre las conducciones burocratizadas en los sindicatos, los oscuros manejos de fondos estatales por parte de dirigentes sociales, o las rutinizadas prácticas de cortes de ruta y calles, cabe hipotetizar si la “espera” en que la nueva gestión libertaria concentrada en un sujeto resuelva de raíz las cosas, no es en realidad efecto de la dominación prolongada sobre las clases subalternas, privadas de ejercer su voluntad a una limitadísima oferta electoral muy corrida hacia la derecha. Ya por efecto de un descreimiento en las organizaciones sociales y políticas, ya por frustración de ver que quien es votado no cumple sus promesas, se fue imponiendo cierto desgano en la práctica militante, que fortalece el proceso de desmovilización. El retiro de la escena pública sugiere un efecto de poder sobre los que no pueden más que esperar.

23

Así las cosas, el ánimo popular sostuvo su confianza en el nuevo gobierno que apenas asumió desplegó su batería de medidas. De arranque, Milei devaluó un 118% el tipo de cambio oficial, duplicando la tasa de inflación que alcanzó el récord de 25% mensual, dato que no se había registrado desde 1989. A nivel normativo, lanzó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y la denominada Ley Bases, que fue sancionada tras múltiples modificaciones en julio de 2024, con una exigua minoría de LLA en ambas cámaras.

A pesar de no tener efectos prácticos en el capítulo laboral, suspendido por la Justicia, una parte muy importante del contenido del DNU fue incluido en la Ley Bases y afecta directamente a los trabajadores: la ampliación del período de prueba, la eliminación de las multas en casos de empleo no registrado, la posibilidad de reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral, limitaciones al derecho de huelga, la creación de la figura del “trabajador independiente con colaboradores” (a quienes no se reconoce ningún derecho laboral), obstáculos a la reinstalación de trabajadores despedidos por actividad sindical, entre otros.

Sobre todo, el ataque a trabajadores de la administración pública es el caballo de batalla de Milei. Apoyado en su doctrina antiestatista extrema, donde él mismo se presentó como el

“topo que destruirá al Estado desde adentro”, eliminó arbitrariamente oficinas, ministerios, dependencias y puestos laborales dando de baja a miles de trabajadores contratados y de planta. Según un informe publicado por la CTA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 casi 200.000 trabajadores perdieron su empleo. Por otra parte, esta situación se desarrolló en paralelo a un aumento visible –respecto de gobiernos anteriores– de la criminalización de la protesta social. Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024, se registraron al menos 41 actos represivos contra protestas en 10 jurisdicciones de todo el país (CTA Autónoma, 2024). Una oleada de allanamientos a organizaciones sociales se sucedieron tras las movilizaciones del 20D, y se repitieron tras las protestas contra la Ley Bases y la Ley Ómnibus, las convocatorias del 8M y 24M, la movilización por la defensa de la educación pública, los dos paros generales de las tres centrales sindicales, y las marchas por la reforma previsional.

24

La política contra las manifestaciones tuvo además un tinte provocador, intentando desalentarlas mediante el amedrentamiento a sus eventuales participantes. El 15 de diciembre de 2023, días antes de la primera movilización bajo el nuevo gobierno y con el motivo de conmemorar el aniversario de la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001, se publicó en el Boletín Oficial (2023) el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, o como el propio gobierno lo llamó, el “protocolo antipiquetes”, es decir, un dispositivo antiprotesta o antimanifestación, con restricciones a los cortes de calle, avisos previos a la policía sobre los eventos de protesta, limitaciones a la cantidad de personas que podían juntarse, y una batería de amenazas a los participantes de organizaciones sociales. Así, “el que marcha no cobra” o “el que corta pierde el plan”, constituyeron los dispositivos mediante los cuales se advertía de consecuencias a aquellos poseedores de planes sociales. De esta manera, se instalaba a través de los medios de comunicación una fuerte presión desmovilizadora basada en la sospecha de que todo aquel que se movilizaba lo hacía por presiones de sus dirigentes, porque quería desestabilizar al gobierno, o porque defendía su puesto de trabajo en el Estado, y por lo tanto, era parte de “la casta”. El gobierno llegó a habilitar un número de teléfono y mensajes por altavoces en terminales de trenes y colectivos alentando la denuncia a estos posibles actos de coerción, que en su particular mirada obligaban a trabajadores sindicalizados o miembros de organizaciones sociales a movilizarse bajo amenaza.

Esta lógica operaba ya con cierta fuerza años atrás, en el sentido de la deslegitimación de la protesta en general; ahora, se convirtió en política de Estado, de un Estado dirigido por un presidente particularmente adverso a su desarrollo. Otro ejemplo interesante fueron las imágenes que transmitieron los canales de televisión del presidente o de su ministra de seguridad monitoreando en tiempo real las cámaras que registraban minuto a minuto el despliegue de los manifestantes. Las horas que duraron esas imágenes, intercaladas con manifestantes marchando y/o enfrentando episodios represivos, pretendió transmitir la sensación de que efectivamente la acción callejera de protesta era asunto de Estado.

Respecto de la represión, el texto del Protocolo resulta elocuente del reforzamiento de una represión institucional que sin dudas juega un papel central como presión externa del proceso de desmovilización. Las fuerzas de seguridad intervendrían sin necesidad de orden judicial ante cortes totales o parciales de vías de circulación y “En la medida de lo posible, deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda”. También estableció que el gobierno “podrá demandar judicialmente a las organizaciones... así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” y “por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas”. Finalmente, se buscó amedrentar a mujeres y personas migrantes, con medidas como las represalias sobre quienes asistieran con niños a las manifestaciones:

Los datos a los que se refiere el artículo precedente serán también comunicados a la autoridad a cargo de la protección de los menores cuando se comprobare que se ha llevado a niños o adolescentes a la concentración, con riesgo de su integridad física y en detrimento de su concurrencia a los establecimientos educacionales... En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes (Boletín Oficial, 2023).

La letra y el espíritu de la nueva norma tuvo una amplificación inédita a partir de las declaraciones del propio presidente Milei y funcionarios de primera línea —empezando por la ministra de seguridad Patricia Bullrich—, y de su reivindicación entusiasta en los medios masivos y redes sociales hecha por los militantes libertarios y macristas, por lo que es difícil

exagerar su impacto. Este hecho no debe dejar de considerarse a la hora de explicar por qué, a pesar de las medidas descritas más arriba, la protesta laboral apenas se incrementó del 20 al 29% si se comparan los primeros 100 días del gobierno de Alberto Fernández con los de Javier Milei. La represión desproporcionada de distintas movilizaciones –entre las que destacan las de los jubilados– y la abierta reivindicación por parte del gobierno de la actuación de las fuerzas de seguridad configura un nuevo escenario, en el que el ejercicio desmedido de la violencia estatal no parece tener costos políticos.

Lo anterior no implica que las protestas de trabajadores precarizados y formales hayan desaparecido, de hecho, destacan los conflictos vinculados a demandas por alimentos (comedores populares) y contra las medidas de ajuste en general. Los protagonistas de la protesta durante los primeros 100 días de gobierno de LLA fueron los sindicatos (36%) y las organizaciones sociales (35%); durante el gobierno de Alberto Fernández, los valores fueron 22% y 24% respectivamente para el mismo período. Hubo más concentraciones, paros y cortes durante los primeros 100 días del gobierno de LLA que durante los del FdT. Sin embargo, si se consideran los repertorios de acción utilizados, el registro indicó una disminución de la movilización: 44% de los conflictos durante el mismo periodo de la gestión del FdT involucraron movilizaciones, mientras que durante la gestión de LLA sólo en el 18 % de los casos se recurrió a ese tipo acción (Soto Pimentel, Gradin y Reiri, 2025). ¿Este cambio en los repertorios de protesta, donde se retrae el formato movilización, estaría indicando un efecto inmediato del protocolo antipiquetes?

Justamente, en lo que se refiere a los trabajadores asalariados la gran incógnita es la retracción de la movilización y también del método del paro bajo el gobierno de Milei. Aún cuando el registro de protestas en esta primera etapa fue algo superior respecto a los primeros 100 días del gobierno de Alberto Fernández, está lejos de guardar cualquier proporción, considerando que se trata ahora del régimen que más agresivamente y en corto tiempo ha atacado las condiciones de reproducción de los trabajadores por lo menos desde el regreso de la democracia en 1983. La falta de reacción defensiva hace pensar en que las estructuras dirigenciales sindicales estuvieron durante el primer año de gobierno libertario al resguardo de sus fuentes de ingresos (obras sociales, cuotas sindicales) al precio de desincentivar la

movilización de sus bases. Si bien los paros generales del 24 de enero y del 9 de mayo de 2024 constituyeron un récord en términos temporales si se compara con todas las gestiones anteriores, esto es, dos paros generales en menos de 105 días de asumido un nuevo gobierno, además acompañados por las masivas movilizaciones universitarias, lo cierto es que la aparente tendencia pronto truncó en inacción total.

No obstante, el problema de la movilización no debe reducirse a la voluntad de las direcciones políticas de las organizaciones, suponiendo que las bases quedan a merced de aquellas. Es innegable que condicionamientos burocráticos suelen desalentar fenómenos emergentes de democracia obrera, es más, en la tradición sindical argentina el estilo de ejercicio de poder peronista, hegemónico hace más de medio siglo, no suele prescindir de los métodos violentos para quebrar disidencias o cuestionamientos internos. Con todo, si la potencia contestataria es significativa deberían observarse resquebrajamientos o episodios que pongan en juicio esa dominancia. Muy probablemente, los efectos pasivizantes de semejante predominio, que implica apoyo a gobiernos peronistas y de oposición o connivencia con los de otro signo político, estén haciéndonos ver otra consecuencia a largo plazo: los resultados de la enmarañada política sindical han sido no solo antidemocráticos sino fundamentalmente desmovilizadores.

Mención especial en este desarrollo merece la ofensiva contra las organizaciones sociales y de desocupados. Esta resultó clave en la estrategia del nuevo gobierno, produciendo efectos desmovilizantes en este numeroso sector, que supera los dos millones y medio de miembros según diversas estimaciones, y conforma el universo mayor de la economía informal donde se calcula unos ocho millones de personas. Los conflictos por alimentos (comedores populares) obedecen a su desfinanciación estatal y al intento de dismantelarlos porque son considerados bases de sustentación (material y simbólica) del tipo de movilización que el gobierno actual intenta desactivar. Por lo mismo, se redefinieron los planes sociales apuntando a eliminar la intermediación de las organizaciones y se aplicaron aumentos a los montos percibidos por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, aún cuando no llegan a recuperar lo perdido por la devaluación, aportan niveles elementales de subsistencia. A esto, se le suma la amenaza y el ejercicio de la represión y la persecución judicial de los

dirigentes sociales.

Quizás el caso más emblemático, pero no el único, sea el del procesamiento de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, organización que agrupa a trabajadores informales y desocupados y administra fondos estatales del denominado Plan Potenciar Trabajo, pensado para insertar en el mercado laboral a población “en situación de vulnerabilidad”. En sus inicios, durante el año 2020, el programa estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y entre sus objetivos se mencionan lograr que sus beneficiarios finalicen estudios, adquieran formación laboral y capacitación en diversos oficios. Sumado a otras políticas públicas como la AUH, Becas Progresar, el Programa Acompañar y la Asignación Universal por Embarazo, pilares de las políticas progresistas, pronto cayeron en un manto de sospechas por la supuesta discrecionalidad del manejo de fondos, la injerencia estatal en la política de los movimientos sociales que los solicitaban, o por la vinculación estrecha con otras organizaciones políticas tal como sucedió con el Polo Obrero que aquí mencionamos, brazo piquetero y de desocupados del Partido Obrero. Nacido al calor de las protestas de fines de los años ‘90 junto a otras tantas organizaciones de desocupados, siguió la deriva de la mayoría de ellas, determinada por su dependencia de planes estatales de asistencia y la filiación política de origen, en este caso, un partido de la izquierda trotskista. De fuerte impronta callejera en sus reclamos, del año 2001 a la actualidad estas organizaciones sufrieron mutaciones relacionadas a su recambio generacional por un lado y a las tensiones que su necesaria vinculación a las políticas públicas acarrea, al punto de quedar muy lejos de sus orígenes beligerantes en los populares y masivos cortes de rutas y calles. Finalmente, fueron exitosamente estigmatizadas por los medios de comunicación y los partidos políticos dominantes y frecuentemente ignoradas por la mayoría de la dirigencia sindical. La suerte actual de estos fenómenos de protesta y organización quedó confinada a la mera obtención de magros beneficios alimentarios, o limitados a protestas por la pérdida de planes sociales o contra la criminalización de sus dirigentes, de modo que su base redujo al mínimo su carácter militante y su horizonte político, contribuyendo a la desmovilización general.

Así las cosas, a fines de febrero de 2024 el gobierno de LLA a través del Ministerio de Capital Humano anunció la eliminación del plan Potenciar Trabajo y la redistribución de sus

beneficiarios en dos nuevos programas, con similares objetivos: el "Programa Volver al Trabajo" y el "Programa de Acompañamiento Social". En el comunicado, el gobierno explicitó que "Los nuevos programas implementarán mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos que tenían las Unidades de Gestión encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa".⁶ Reducidos cada vez más a desempeñarse como intermediarios en la distribución de la ayuda social, unos movimientos de desocupados crecientemente desmovilizados y despolitizados parecen observar el cuadro de su propio desmoronamiento sin capacidad de contrarrestar la avanzada oficial.

A modo de conclusión

En este escrito intentamos avanzar sobre la hipótesis de un proceso de desmovilización en sindicatos y movimientos sociales cuyas raíces pueden encontrarse años atrás. Esta desmovilización fue solidaria del ascenso de un gobierno de extrema derecha cuyo ataque principal recae en la idea de 'casta', traducida en una avanzada contra trabajadores del sector público, acompañada de un ajuste que golpea a toda la clase obrera. Nos animó el siguiente interrogante: ¿cómo interpretar esta situación considerando la tradición de luchas sindicales y sociales que presentó históricamente Argentina, sobre todo alrededor del año 2001?

Un estudio clásico sobre el comportamiento de los sindicatos frente a las reformas neoliberales implementadas durante los años '90 destacaba tres tipos de reacciones: resistencia, subordinación y supervivencia organizativa (Murillo, 1997), siendo ésta última la más novedosa. La huella de los '90 dejó ver a las cúpulas sindicales concertando reformas con el gobierno, participando en el negocio de las privatizaciones, y fundamentalmente aplazando políticas que afectaban sus intereses organizativos. La contracara fueron las resistencias de los gremios estatales que protagonizaron acciones de protesta, mezclándose con otras franjas de

⁶ "El Gobierno anunció que elimina el plan Potenciar Trabajo", El Destape web. 27 de febrero de 2024. <https://www.eldestapeweb.com/politica/ministerio-de-capital-humano/el-gobierno-anuncio-que-elimina-el-plan-potenciar-trabajo-202422720440>. "Unidades de Gestión" es la nueva denominación planteada desde el estado para las organizaciones o movimientos sociales, incluidos previamente bajo el concepto de "economía popular".

trabajadores desocupados.

Entre afectados, desplazados, beligerantes y negociadores, la clase obrera argentina experimentó desde los '90 hasta la actualidad la profundización de un clivaje que consolidó la frontera entre aquellos que lograban conservar su condición salarial y los que padecían la pérdida de esa condición o la precarización de sus trabajos. Está claro que, desde la formación de la clase obrera argentina, nunca existió homogeneidad entre asalariados. Sin embargo, aquí queremos destacar que esas diferencias pueden confluir en una alianza política, o por el contrario, cristalizar en sectores o fracciones cuyo acceso o denegación de condiciones laborales traza límites que obstaculizan la solidaridad de clase.

El fenómeno al que hoy asistimos apenas transcurrido un año y medio de gestión de LLA muestra precisamente cómo ese clivaje preexistente entre trabajadores genera una suerte de competencia interna visibilizada en el discurso sobre poseedores de derechos versus carentes de ellos. Pero, como sugerimos, la tendencia no es al acceso universalizado, sino por el contrario, al despojo igualitario: los poseedores de derechos son además rebautizados por el gobierno de Milei como “casta”. He aquí una de las novedades del período, la estigmatización de una franja de trabajadores, especialmente de la administración pública, que gozarían de privilegios (aguinaldo, vacaciones pagas, estabilidad laboral, etc.) y serían soportados por la población empobrecida. Con la pandemia, apareció como novedad relativa que aquellos que protestaban por salarios o condiciones laborales amenazadas lo hacían también oponiéndose o desafiando a sus conducciones gremiales, acusadas de burócratas.

Con cierta eficacia, el discurso mileísta, apuntó a un tiempo contra los trabajadores con derechos y contra burócratas sindicales que viven a costa de sus afiliados. La crítica a la burocratización de los sindicatos tampoco es nueva, tiene antecedentes por lo menos desde mediados del siglo pasado, sin embargo ahora es transformada en una sentencia casi definitiva basada en aquel historial. Apuntando contra ellos, pero afectando en realidad a todo aquello que se movilice, están los no tan nuevos protocolos antipiquetes, que constituyen la fase de coacción física inhibitoria de toda movilización, que ahora se ha convertido en cuestión de Estado. El interrogante que surge es cuánto de estas mutaciones impactarán en las tradiciones de la clase obrera argentina en un aspecto que la hizo célebre, más allá de sus diferenciaciones internas: su

disposición a la acción colectiva.

Referências

AIZICZON, F. 2016. Trayectorias militantes, izquierda y política sindical: la intervención del MAS en Sierra Grande a través de las vivencias de un obrero minero, Patagonia Argentina (1988-1991). **Izquierdas**, 31. 46-70, 2016.

AIZICZON, F. *Cultura política, militantes y movilización. Neuquén durante los años 90*. Buenos Aires: Prometeo, 2017.

BENCLOWICZ, J. Repensando los orígenes del movimiento piquetero. Miseria y experiencias de lucha antes de las contrarreformas de la década de 1990 en el norte argentino. **Latin American Research Review**. 46 (2). p. 79-103, 2011a.

BENCLOWICZ, J. “Continuities, scope and limitations of the Argentine picket movement”. **Latin American Perspectives**. 38 (1). p. 74-87, 2011b.

BENCLOWICZ, J. *Estado de malestar y tradiciones de lucha. Genealogía del movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi*. Buenos Aires: Biblos, 2013.

BASUALDO, V.; PELÁEZ, P. Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del COVID-19 en Argentina (marzo-mayo 2020). **Documentos de Trabajo**. Buenos Aires: FLACSO, 2020.

BOLETÍN OFICIAL. Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad. 14 de diciembre, 2023. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215>.

CTA Autónoma. El primer año del gobierno de Javier Milei. Ajuste, represión y resistencia, 2024. <https://ctaa.org.ar/el-primer-ano-del-gobierno-de-javier-milei-ajuste-represion-y-resistencia-popular/>

COLLADO, P.; ROITMAN, S. Conflicto laboral y politicidad emergentes en la Argentina pandémica. **Utopía y praxis latinoamericana**, 104. 1-23, 2024.

BONNET, A. *La insurrección como restauración*. Buenos Aires: Prometeo, 2015.

CARACOCHE, C. *Duhaldismo, kirchnerismo y macrismo. El capitalismo argentino y su recurrencia histórica*. Buenos Aires: Imago Mundi, 2020.

GHIGLIANI, P. 2020. “La clase obrera a la defensiva (2015-2020)”. *Plaza Pública*, 13 (23).

p. 134-158. *Memoria Académica*, 2020.

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12705/pr.12705.pdf

DAVENPORT, C. *How social movements die*. New York: Cambridge University Press, 2015.

DELLA PORTA, D.; REITER, H. The Policing of Protest in Western Democracies”. In: DELLA PORTA, D.; REITER, H. (comps.) *Policing protest: the control of mass demonstrations in western democracies*. University of Minnesota Press: Minneapolis, p. 1-32, 1998.

<https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Policing-Protest-The-Control-of-Mass-Demonstrations-in-Western-Democracies-edited-by-Donatella-della-Porta-and-Herbert-Reiter-.pdf>

DEMIREL-PEGG, T. The dynamics of the demobilization of the protest campaign in Assam.” **International Interactions**. 43(2), p. 175–216, 2017.

EARL, J. Controlling Protest: New Directions for Research on the Social Control of Protest. **Research in Social Movements, Conflicts, and Change**, Special Issue on Authority in Contention 25. 55-83. UK: Emerald Group Publishing, 2004.

https://www.researchgate.net/publication/354779142_Patterns_Of_Demobilization_A_Qualitative_Comparative_Analysis_QCA_of_Far-Right_Demonstration_Campaigns

FILLIEULE, O. Disengagement from Radical Organizations. A process and multi-level model of analysis. **Movements in Times of Transition**, Bert Klandermans and Cornelius van Stralen, eds. Minneapolis: University of Minnesota Press. p. 1-29, 2009.

FILLIEULE, O. Demobilization and Disengagement in a Life Course Perspective. In: DONATELLA DELLA, P.; MARIO, D. (eds.). *The Oxford Handbook of Social Movements*. Oxford: Oxford University Press. p. 277-288, 2015.

GORSKI, P.; CHER, C. Frayed All Over: the causes and consequences of activist burnout among social justice education activists. **Educational Studies**. 51(5). p. 385–405, 2015.

HEANEY, M.; FABIO R. The Partisan Dynamics of Contention: Demobilization of the Antiwar Movement in the United States, 2007-2009. **Mobilization: An International Journal**. 16(1): p. 45–64, 2011.

KOOPMANS, R. Dynamics of repression and mobilization: the german extreme right in the

1990s”. **Mobilization: An International Quarterly**. 2(2), p. 64-149, 1997.

PIMENTEL, V. S.; GRADIN, A.; REIRI, M. La conflictividad social a 100 días del inicio del gobierno de Javier Milei”. **Estado y Políticas Públicas**. Informe N°44, 2025. <https://politicaspublicas.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2024/03/Informe-44-Observatorio.pdf>.

MURILLO, V. La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado durante la primera presidencia de Menem. **Desarrollo Económico**. 37 (147). p. 419-446, 1997.

OSDA-UCA. *Deudas sociales en la Argentina urbana (2010-2022)*. 2022. https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2022/2022-OBSERVATORIO-RESUMEN-Deudas-Sociales-en-la-Argentina-Urbana-2010-2022_Anexo-PRENSA.pdf.

OSDA-UCA. Escenario laboral en la Argentina del pos-Covid 19. 2023 https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2023/Observatorio-DocumentoEstadistico_Trabajo_2023.pdf.

PIVA, A. Entre la resistencia y la desmovilización. Una aproximación cuantitativa al estudio del conflicto obrero en Argentina, 2006-2022. **Apuntes**. 51 (97), p. 20-61, 2024.

SEMÁN, P. *Está entre nosotros*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2023.

Resumen: El artículo analiza el proceso de desmovilización social que atraviesan los sindicatos y las organizaciones sociales en Argentina en el marco del ascenso y consolidación del gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei. Partiendo de una perspectiva histórica, el trabajo reconstruye las transformaciones de la acción colectiva desde las reformas neoliberales de la década de 1990, el ciclo de protestas que culminó en el Argentinazo de 2001, los gobiernos kirchneristas, los años pandémicos y la coyuntura actual. Se sostiene que la desmovilización no es un fenómeno abrupto ni exclusivamente atribuible a la represión reciente, sino el resultado de una acumulación de procesos estructurales: la fragmentación interna de la clase trabajadora, la profundización de las desigualdades entre trabajadores con y sin derechos, la burocratización sindical, la institucionalización y despolitización de los movimientos sociales y el cierre progresivo de oportunidades políticas para la movilización. El artículo muestra cómo el discurso anti-“casta” del mileísmo resignifica el histórico “que se vayan todos”, transformándolo en una pulsión igualitarista negativa que legitima el despojo de derechos laborales y sociales. Finalmente, se argumenta que la combinación de represión estatal, estigmatización de la protesta y deslegitimación de las organizaciones colectivas ha contribuido a consolidar un campo de desmovilización generalizada, incluso frente a uno de los ajustes más profundos desde el retorno de la democracia.

Palavras-chave: Desmovilización social; sindicalismo; movimientos sociales; ultraderecha; ajuste neoliberal; represión estatal; clase trabajadora; Argentina.

Abstract: The article analyzes the process of social demobilization affecting trade unions and social organizations in Argentina in the context of the rise and consolidation of the far-right government led by Javier Milei. From a historical perspective, the study reconstructs the transformations of collective action from the neoliberal reforms of the 1990s, the cycle of protests that culminated in the 2001 Argentinazo, the Kirchnerist governments, the pandemic years, and the current conjuncture. It argues that demobilization is neither an abrupt phenomenon nor one attributable exclusively to recent repression, but rather the result of an accumulation of structural processes: the internal fragmentation of the working class, the deepening of inequalities between workers with and without rights, trade-union bureaucratization, the institutionalization and depoliticization of social movements, and the progressive closure of political opportunities for mobilization. The article shows how Milei's anti-"caste" discourse resignifies the historic slogan "they all must go," transforming it into a negative egalitarian impulse that legitimizes the stripping away of labor and social rights. Finally, it argues that the combination of state repression, stigmatization of protest, and delegitimization of collective organizations has contributed to consolidating a generalized field of demobilization, even in the face of one of the most profound adjustment processes since the return of democracy.

Keywords: Social demobilization; trade unionism; social movements; far right; neoliberal adjustment; state repression; working class; Argentina.